



**Medellín, dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós  
(2022)**

En este proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por LIGIA RODRÍGUEZ ARIAS contra LEONISA S. A. S. y OTRO, radicado número 050013105-019-2021-00387-01, fue proferido auto que aceptó el desistimiento del recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia emitida en primera instancia el pasado primero (1º) de junio de 2022, y, además se dispuso admitir el conocimiento del proceso en Consulta a favor de la demandante conforme lo dispuesto en los artículos 69 y 82 del CPT y la SS, modificado este último por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, decisión frente a la cual el apoderado de LEONISA S. A. S. interpone oportunamente el recurso de reposición.

Motivó su inconformidad en que el fundamento del envío del expediente en grado jurisdiccional de consulta se guía por el artículo 316 del CGP, el cual reza lo siguiente:

**“Artículo 316. Desistimiento de ciertos actos procesales.** Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido. No podrán desistir de las pruebas practicadas. El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han remitido al superior, o ante el secretario de este en el caso contrario. El auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, lo mismo que a perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas. No obstante, el juez podrá abstenerse de condenar en costas y perjuicios en los siguientes casos: **1)** Cuando las partes así lo convengan. **2)**

*Cuando se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido. **3)** Cuando se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriada y no estén vigentes medidas cautelares. **4)** Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. De la solicitud del demandante se correrá traslado a demandado por tres (3) días y, en caso de oposición, el juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así solicitado. Si no hay oposición, el juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas.”*

Precisó que lo que el citado artículo regula es que una vez se desiste del recurso de apelación, la providencia dictada en la primera instancia queda en firme y en consecuencia no es posible aplicar la figura del grado jurisdiccional de consulta, porque de aplicarse implica una desnivelación procesal en contra de la parte no apelante, por cuanto que quien apeló en contra de la sentencia tuvo la oportunidad de analizar y presentar todos los fundamentos de derecho que creía valer, los cuales harían parte del expediente para todos los efectos, como es la revisión por parte del Tribunal Superior de Medellín. Considera contrario a la figura del grado jurisdiccional de consulta que se surte, precisamente, para que el Tribunal analice el proceso de manera integral y no parcial, no así cuando llega el expediente con argumentos exclusivos del recurso, en cuyo caso su análisis se limita y concentra en los mismos y no en el resto del expediente.

Solicita se reponga la decisión adoptada en providencia del 21 de octubre de 2022, notificada el 24 del mismo mes y año, y se generen los efectos de la sentencia tal como lo establece el artículo 316 del CGP, y en consecuencia se declare la firmeza de la sentencia emitida el primero (1º) de junio de 2022 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín y proceda a la liquidación de las costas para el posterior archivo previo envío al juez competente.

## **CONSIDERACIONES:**

El artículo 63 del CPT y de la SS, establece la procedencia del recurso de reposición en contra de los autos interlocutorios, el cual debe ser interpuesto dentro de los dos (2) días siguientes a su notificación cuando ésta se haga por estados, por lo tanto, como se observa que estos requisitos se cumplen, procederá el Despacho a pronunciarse de fondo sobre el mismo.

La inconformidad del recurrente busca que se reponga el auto del 21 de octubre de 2022, mismo que admitió desistimiento del recurso de apelación y dispuso en su numeral 2º el conocimiento en grado jurisdiccional de consulta.

Como se indicó, el sustento del recurso refiere a la aplicación normativa por extensión o integración del derecho que permite el artículo 145 del CPT para observar el artículo 316 del CGP, y concretamente a dejar en firme la sentencia de primera instancia respecto de la que se admitió el desistimiento del recurso de apelación.

Para tal sustento expone la desigualdad procesal frente a quien no propuso tal recurso, y sustentó su pedimento en decisión de este Tribunal correspondiente a la Sala Sexta de Decisión Laboral emitida el 21 de noviembre de 2021 dentro del proceso de radicado número 05001310501720200037701, que avaló tal interpretación.

Debe resolverse entonces, si el desistimiento del recurso de apelación de una decisión (art. 316 del CGP) que por su naturaleza tiene el grado jurisdiccional de consulta, puede cobrar firmeza sin que se surta tal prerrogativa del Derecho Procesal del Trabajo. El siguiente análisis lleva a la conclusión de la obligatoriedad del mismo como parte de las garantías que regula el derecho laboral para el trabajador vencido en juicio en la totalidad de las pretensiones.

El artículo 69 del CPT y de la SS que en su tenor literal reza:

**“ARTICULO 69. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA.** <Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007. Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas.” (Subrayas del Despacho)

Se trata de una norma especial aplicable al juicio laboral únicamente, dado su carácter tuitivo, visto en los artículos 1º<sup>1</sup>, 9º<sup>2</sup> y 14<sup>3</sup> del CST, de donde se desprende que al ser una “prerrogativa” tiene el carácter de irrenunciable y por tanto constituye un derecho mínimo que tiene el trabajador frente al proceso en el cual es vencido en la totalidad de las pretensiones.

Este carácter obligatorio se advierte en el propio texto del artículo 69 del CPT y de la SS, cuando advierte acerca de la “necesidad” de efectuarse esta revisión integral del juicio, en el supuesto de ser vencido en juicio el trabajador. De manera que no es posible dar alcance interpretativo a una disposición que no es específica a las particularidades tuitivas del juicio laboral que predica nuestro Estado Social por mandato constitucional desde el preámbulo. La importancia de esta institución que obliga oficiosamente a la revisión integral de la actuación, esta descrita en la sentencia C-968 de 2003, MP. Dra. Clara Inés Vargas Hernández, en la que se expresó lo siguiente:

*“A diferencia de la apelación, la consulta no es un medio de impugnación sino una institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del juez que ha dictado una providencia,*

俚

<sup>1</sup> **ARTICULO 1º. OBJETO.** La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre {empleadores} y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

<sup>2</sup> **ARTICULO 9º. PROTECCION AL TRABAJO.** El trabajo goza de la protección del Estado, en la forma prevista en la Constitución Nacional y las leyes. Los funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones.

<sup>3</sup> **ARTICULO 14. CARACTER DE ORDEN PUBLICO. IRRENUNCIABILIDAD.** Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.

en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo, lo cual significa que la competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida”.<sup>4</sup>

“La consulta es un mecanismo ope legis, esto es, opera por ministerio de la ley y, por tanto, suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando no se interpone por ésta el recurso de apelación, aunque en materia laboral el estatuto procesal respectivo la hace obligatoria tratándose de entidades públicas. Además, la consulta está consagrada en los estatutos procesales generalmente con base en motivos de interés público con el objeto de proteger a la parte más débil en la relación jurídica que se trate.”<sup>5</sup>

En esa misma sentencia también se indica:

“En consecuencia, para la Corte las expresiones “la sentencia de segunda instancia”, “deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación” del artículo 35 de la Ley 712 de 2002, se ajustan a la Constitución, en el entendido que las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador. Interpretado de esta forma el segmento normativo acusado del artículo 35 de la Ley 712 de 2002 se hacen efectivos los derechos y garantías mínimas irrenunciables del trabajador que ampara el Ordenamiento Superior.”<sup>6</sup>

俵

<sup>4</sup> Sentencia C-153 de 1995 MP Antonio Barrera Carbonel.

<sup>5</sup> Sentencia C-055 de 1993 MP José Gregorio Hernández Galindo

<sup>6</sup> Vale observar que esta interpretación se identifica con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, que al referirse a la exigencia legal de sustentar la alzada, ha señalado que el juez de la apelación no pierde competencia para decidir sobre aspectos de la resolución de su inferior que no contienen la sustentación adecuada: “La apelación es un recurso ordinario y esta sola circunstancia descarta la posibilidad de exigir una sustentación especial, o sea una que, como la del recurso extraordinario, sea la adecuada por asumir forzosamente el impugnante la necesidad de romper la presunción de legalidad que ampara la providencia que censura. En la apelación lo mismo que en la reposición, el juez de alzada no está sometido a los argumentos que aduce el recurrente y desde luego conserva su propia iniciativa para fundamentar con independencia de aquéllos los motivos que informen la decisión del recurso de apelación. Esta circunstancia no varió con la expedición del artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 que se introdujo al proceso para impedir el ejercicio abusivo del recurso, pero para alcanzar ese fin se limitó a imponer la carga de la sustentación sin adicionarle el cumplimiento de requisitos especiales y sin excluir de la competencia funcional del superior la decisión sobre asuntos que, no obstante estar impugnados no registraran todas las razones o motivos de la inconformidad del recurrente. Ello es así,

Bajo el anterior análisis, no es posible arribar a la conclusión de la firmeza de la decisión adoptada por el a quo, sino más bien a la obligatoriedad de que se surta el grado jurisdiccional de consulta, pues al desaparecer el recurso de apelación deja entonces incólume la remisión para el conocimiento del grado jurisdiccional de consulta.

Debe advertirse, además, que la parte actora desistió del recurso de apelación, no de las pretensiones, figura ésta última regulada por el artículo 314 del CGP, lo que se traduce en que al desistir del recurso se activa la necesidad de consultar el proceso, como si el recurso no se hubiera presentado.

En ese orden de ideas, no se repondrá la decisión y se dispondrá dar continuidad al grado jurisdiccional de consulta conforme a los artículos 69 y 82 del CPT y la SS, modificado este último por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, tal como se indicó en providencia del 21 de octubre de 2022.

En armonía con lo expuesto, el Despacho

## **R E S U E L V E :**

**1. NO REPONER** la decisión adoptada en providencia del 21 de octubre de 2022, notificada el 24 del mismo mes y año.

**2. DAR CONTINUIDAD** al grado jurisdiccional de consulta conforme a los artículos 69 y 82 del CPT y la SS, modificado este último por el

**불**

*porque la norma establece que quien interponga el recurso de apelación deberá sustentarlo por escrito ante el juez que haya proferido la decisión correspondiente antes de que venza el término para resolver la petición de la apelación, de modo que si el recurrente no sustenta la apelación oportunamente, el juez, mediante auto susceptible del recurso de reposición lo declarará desierto, y en el caso concreto lo concederá y enviará el proceso a su superior. Por esto, y porque realmente la norma no impone la necesidad de una fundamentación reglada, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 obliga a sustentar el recurso de apelación con el fin de que el Juez de la alzada circunscriba su decisión a las materias sobre las que los litigantes estén inconformes, lo que no significa que haya desistimiento de la impugnación porque se pasen por alto algunos de los motivos de inconformidad con la providencia de la primera instancia y que el juez de la apelación pierda competencia para decidir sobre aspectos de la resolución de su inferior que no contenga la sustentación adecuada” Sentencia del 19 de diciembre de 1995 (Rdo. 7954). Doctrina reiterada en las sentencias del 24 de noviembre de 1998 la H. Corte (Rdo. 10.810) y en la Sentencia del 9 de mayo de 2002 (Rdo. 13649).*

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, tal como se indicó en providencia del 21 de octubre de 2022

Lo resuelto se notifica en Estados.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 278  
del 19 de diciembre de 2022.

**Consultable aquí:**  
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>

**Firmado Por:**

**John Jairo Acosta Perez**

**Magistrado**

**Sala Laboral**

**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **157b10568e43c4f7b26f15be7664a5a75e346e002d28f82600e6da8d22a4cf1e**

Documento generado en 16/12/2022 02:21:18 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**